



Foto: media.primicias.ec



**IAEN**  
Universidad  
de posgrado  
del Estado

Escuela de  
**Seguridad  
y Defensa**

Boletín

ISSN 2737-646X | IAEN - N.º 6 | Junio de 2024

## Créditos

Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales:  
Patricio Haro Ayerve

Decano de la Escuela de Seguridad y Defensa:  
Galo Cruz

Coordinación y edición:  
Carla M. Álvarez Velasco

Dirección editorial:  
Bolívar Lucio

Corrección de estilo:  
David Chocair

Diagramación y portada:  
Gabriel Cisneros

## Contenido

### Presentación

Carla M. Álvarez Velasco

### Artículos

Seguridad y democracia en perspectiva comparada: ¿hacia dónde va la región andina?

Daniel Pontón Cevallos

Construcción de paz como respuesta a la violencia

Gualdemar Jiménez

Convergencias y divergencias entre la gestión de riesgos de desastres y la seguridad ciudadana

Fernando Barragán Ochoa

Crimen organizado y su impacto en la violencia de género: diferentes abordajes argumentativos

Roxana Arroyo Vargas

Publicaciones sugeridas

## Presentación

El inédito crecimiento de la violencia y de la criminalidad en Ecuador ha supuesto una crisis de consecuencias todavía no cuantificadas. Para enfrentarla, los distintos Gobiernos que se han sucedido en Carondelet desde 2021 han debido implementar una serie de políticas y estrategias orientadas a contener ambos fenómenos.

Durante el período gubernamental comprendido entre mayo de 2021 y el 22 de noviembre de 2023 el expresidente Guillermo Lasso decretó 23 estados de excepción (Plataforma Presidencial, 2024), lo que implica un decreto ejecutivo por cada 1,3 meses. En este período sucedieron 15 masacres carcelarias, las cuales produjeron un aproximado de 500 muertes violentas (Paladines, 2023, pp. 31-32). Además, Ecuador cerró el año 2023 siendo el país con la tasa de violencia más elevada de toda América Latina (InSight Crime, 2024).

En noviembre de 2023, se produjo un cambio de mando. El 21 de dicho mes, inició actividades el nuevo Gobierno de Ecuador. En este mandato, el presidente recién posesionado continuó con la lógica de seguridad implementada en el período anterior. De hecho, hasta el momento se han declarado tres estados de excepción (a un promedio de uno cada dos meses), a esto se suma la declaración de conflicto armado no internacional (CANI), mediante el Decreto Ejecutivo N.º 111 del 9 de enero de 2024. Estas medidas permitieron la participación de los militares en el control de las cárceles, el apresamiento masivo de supuestos miembros de organizaciones terroristas<sup>2</sup> y, por último, la convocatoria a una consulta popular cuyo tema central fue la participación de los militares en la seguridad ciudadana.

2 Véase <https://shorturl.at/bklX3>

Sin embargo, a lo largo del primer quimestre del 2024, se observó un incremento de la violencia en sus distintas manifestaciones, como secuestros,<sup>3</sup> extorsiones<sup>4</sup> y, en algunas localidades, incluso asesinatos.<sup>5</sup>

En este escenario, ¿qué balance se puede hacer de estas iniciativas? ¿Cómo deben enfrentar los desafíos de la criminalidad el Estado y la sociedad ecuatoriana? ¿Qué sucede con la democracia en un contexto de predominio de la mano dura? ¿Cómo se ven afectados los derechos humanos en medio del CANI? ¿Qué ocurre con las mujeres en medio del fuego cruzado? ¿En qué coincide la gestión de riesgos con la gestión de la seguridad ciudadana?

El análisis de la situación de inseguridad en Ecuador requiere respuestas a estas preguntas, y tanto la comunidad académica nacional como internacional se

ha interesado por desempeñar la comprensión del contexto ecuatoriano actual, con el objetivo de aportar luces sobre este fenómeno. Como parte de estos aportes, desde el IAEN, un grupo de docentes e investigadores de la Escuela de Seguridad y Defensa y de la Escuela de Relaciones Internacionales han plasmado un conjunto de reflexiones que se compilan en esta sexta edición del *Boletín Paralelo Cero*. En este documento, los autores reflexionan sobre los aportes de las medidas adoptadas hasta el momento, buscando trascender el conteo exhaustivo de las víctimas de la violencia y de las razones del crecimiento de las actividades criminales, para incorporar la perspectiva de la democracia, la gestión de riesgos, los derechos humanos y la cuestión de género, temáticas que serán tratadas en cada uno de los artículos aquí presentados

Dra. Carla Álvarez  
**Editora de Paralelo Cero**

- 
- 3 En los primeros tres meses de 2024, Ecuador cuadruplicó al cifras de alerta por secuestros a escala nacional, las cuales pasaron de 75 llamadas durante el primer trimestre de 2023 a casi 300 en el mismo período de 2024 (*Primicias*, 18 de marzo de 2024).
  - 4 Durante el primer trimestre de 2024, la ciudad de Guayaquil experimentó un incremento del 476 % en extorsiones, en comparación con el mismo período en 2023 (*Primicias*, 4 de abril de 2024).
  - 5 A escala nacional se registra un descenso del 20 % de los asesinatos en el primer cuatrimestre del año 2024, pasando de 2085 en 2023 a 1707 en 2024. No obstante, el número de muertes aumentó en las provincias de Orellana, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Sucumbíos, Cañar, Tungurahua, Imbabura y Bolívar (Ecuavisa, 27 de abril de 2024).



## Referencias bibliográficas

- Börzel, T., & Risse, T. (2015). Ecuavisa (4 de abril de 2024). Estado de excepción: más de 13 000 detenidos, pero solo 180 casos están en etapa de juicio. <https://shorturl.at/bklX3>
- \_\_\_\_\_ (27 de abril de 2024). Nueve provincias tienen más muertes violentas en lo que va del 2024, en comparación con el 2023. <https://shorturl.at/cxz36>
- Manjarrés, J., y Newton, C. (2024). Balance de InSight Crime de los homicidios en 2023. *InSight Crime*. <https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2023/>
- Paladines, J. (2023). *Matar y dejar matar. Las masacres carcelarias y la (des)estructuración social del Ecuador*. El Siglo.
- Plataforma Presidencial (2024). Consulta de decretos. [https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios\\_externos.jsf](https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf)
- Presidencia de la República del Ecuador (2024). Decreto Ejecutivo No. 111 de 9 de enero de 2024. [https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios\\_externos.jsf](https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf)
- Primicias* (18 de marzo de 2024). Guayaquil, Quevedo y Quito registran más alertas por secuestros en 2024. *Primicias*. <https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/guayaquil-quevedo-quito-aumento-alertas-secuestros-2024/>
- \_\_\_\_\_ (4 de abril de 2024). Alertas por extorsiones en Guayaquil aumentaron casi cinco veces en 2024. *Primicias*. <https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/alertas-extorsiones-guayaquil-incremento-primer-trimestre/>

# Seguridad y democracia en perspectiva comparada: ¿hacia dónde va la región andina?

Daniel Pontón Cevallos<sup>1</sup>

Docente titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

## 1. Introducción

El objetivo de este documento es explorar la consolidación democrática en los países de la región andina en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. Este asunto es relevante porque existe un dilema en la política comparada que determina que la presencia del crimen organizado es un detonante importante en el menoscabo y debilitamiento de las instituciones democráticas de un país. Sin embargo, por otro lado, se argumenta que es la falta de consolidación de esas instituciones democráticas lo que genera las condiciones para el surgimiento de esta amenaza.

Esta paradoja, difícil de abordar, suele llevar a que los esfuerzos académicos y analíticos se centren en fortalecer las capacidades de los gobiernos y los Estados para contener y neutralizar la arremetida del crimen organizado, sin considerar los medios y los costos de estas estrategias en términos del debilitamiento de las instituciones democráticas y las implicaciones que

esto tiene para la proyección del crimen organizado. Por esta razón, en un contexto en el que la lucha contra el crimen organizado en América Latina se ha constituido en un asunto prioritario en la agenda de todos los organismos de integración regional, ¿cuál es la situación de la región andina en cuanto a la consolidación de la democracia?

Este texto inicia con una discusión sobre el Estado democrático y su relación con la inseguridad y el crimen organizado. Luego de ello, se analiza de manera comparativa la situación de la democracia en la región andina desde la perspectiva de la opinión pública. Por último, se examinan las respuestas sociales y políticas al crimen y se discuten sus posibles riesgos a la democracia.

## 2. Democracia, Estado y seguridad

A partir del fin de la Guerra Fría, la variable “Estado” ha desempeñado un rol fundamental en la evaluación de la seguridad internacional, en relación con una serie de amenazas comunes de orden transnacional

<sup>1</sup> Doctor en Sociología por la Universidad Nacional de El Cuyo. Docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Universidad Central del Ecuador. Coordinador de la Maestría en Victimología. Correo electrónico: daniel.ponton@iaen.edu.ec; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2608-396X>.

como el terrorismo y el crimen organizado. De hecho, se clasifica a los Estados según su grado de peligrosidad y riesgo (colapsados, fallidos, débiles, fuertes, entre otras clasificaciones) en la seguridad internacional (Rotberg, 2003). En palabras de Santos (2009, p. 10), “el fracaso del Estado se ha definido por su incapacidad para proveer los bienes políticos fundamentales asociados con la estabilidad como la seguridad, el estado de derecho, la administración de servicios públicos y el bienestar social, entre otras cosas”.

Lejos de entrar en el debate sobre las críticas a este concepto por desconocer distintas acepciones de Estado y descontextualizar las razones por las que un país llega a adquirir la etiqueta de débil o fallido (Callejas, 2014), en los estudios de seguridad, el Estado es una categoría civilizatoria y pacificadora de la sociedad, al menos en el hemisferio occidental. De hecho, Morris (2014) rescata la figura del *leviatán hobessiano* para desarrollar el concepto de “guerras productivas” en función de establecer la capacidad de los Estados para proveer protección, estabilidad y paz a los países.

No obstante, la crítica liberal a este modelo hobessiano consiste en que esta apuesta por un gran Estado protector no debería traducirse en una renuncia a las libertades civiles ni en una sumisión incondicional a una Estado opresor y violento, sino más bien en una obediencia razonable marcada por la ley, la separación

de poderes y el uso proporcional de la fuerza (Cortés, 2010). La paz liberal kantiana, entonces, emerge como la única opción razonable y civilizatoria de garantizar la seguridad de los Estados en el contexto internacional. Cualquier exceso en la aplicación de la fuerza del Estado, justificado por muchas posiciones políticas extremistas con “un mal menor”, es considerado una perturbación y una derivación que rompería el equilibrio de la tensión entre seguridad y libertad. La esencia de la seguridad, entonces, reside tanto en sus fines como en sus medios. El republicanismo liberal democrático se constituye así en un juego de equilibrios y contrapesos sociales e institucionales, de economía del uso de la fuerza, y de una gestión pública orientada a resolver problemas en función de evidencias científicas.

Cuatro premisas se posicionan en el Estado democrático para la garantía de la seguridad internacional: 1) Estados fuertes en control territorial y provisión eficiente de servicios públicos; 2) ejercicio de la violencia legítima (legal); 3) justicia efectiva, imparcial e independiente; y 4) promoción de la democracia como ejercicio de autonomía individual y colectiva, sin dominación.

En materia comparada, se pueden observar diferencias significativas entre regiones a escala mundial respecto a su grado de consolidación de la democracia y sus logros en materia de control delictual. Las regiones con mayor consolidación de la democracia a nivel

mundial<sup>2</sup> son América del Norte y Europa occidental, las cuales presentan índices de criminalidad y de violencia mucho menores a otras regiones.<sup>3</sup> En contraste, el promedio de América Latina, y en especial la región andina, considerada una democracia débil o en mucho de los casos un “régimen híbrido”, presenta índices de criminalidad y violencia por encima de los promedios mundiales. También es clave analizar el indicador de resiliencia, que muestra la poca capacidad de los Gobiernos y las instituciones para contener y reponerse a los embates de la criminalidad. La región andina apenas supera el promedio mundial.

### 3. La democracia en la región andina

La región andina ha estado permanentemente ubicada en “el ojo de huracán” de la seguridad internacional. Al ser el centro de producción de la economía criminal de la cocaína y de otros tipos de drogas, la región se ha visto afectada por una serie de conflictos criminales que han impactado enormemente tanto el desarrollo de sus instituciones democráticas como económico y el bienestar de la población. La producción histórica de cocaína en los últimos años, así como la proliferación de otras actividades

Tabla 1  
Democracia y crimen organizado en perspectiva comparada

País/región	Índice de democracia según región	Índice de criminalidad	Índice de mercados criminales	Índice de actores criminales	Resiliencia	Tasa de homicidios
América Latina	5,8	6,1	5,8	6,5	4,0	21,0
Región andina	5,7	6,5	6,3	6,8	4,9	19,1
América del Norte	8,4	4,8	4,9	4,7	7,2	6,0
Europa occidental	8,2	4,3	4,2	4,5	7,0	1,0
Mundo	5,5	5,0	4,9	5,2	4,8	6,0

Fuente: Economist Intelligence (2023); Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2023); Banco Mundial (2020); InSight Crime (2024) Cuadro: elaboración propia.

2 Índice realizado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés), que se basa en la agrupación de cinco grandes grupos de indicadores: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política y derechos civiles.

3 Esto se mide en función del índice de Criminalidad Organizada creado por el Global Initiative Against Organized Crime (Gitoc), cuyo resultado en una combinación de indicadores agrupados en mercados criminales y actores criminales. También se incorpora en el análisis la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes.

de delincuencia organizada como el tráfico de armas, de personas y especies naturales, la minería ilegal, entre otros, han agudizado este panorama. La región, al igual que el resto de América Latina, es considerada la más violenta del mundo. Un ejemplo palpable de esta perspectiva es Ecuador, un país que pasó de



ser un territorio de relativa calma a ser considerado uno de los más violentos del mundo. En este contexto, la seguridad y las actividades relacionadas, como la lucha contra la corrupción, se han posicionado como prioritarias.

En el índice de la democracia diferenciada por países, Ecuador y Bolivia se ubican por debajo del promedio de la región andina y América Latina. Por su parte, Colombia, en 2023, a pesar de tener el índice de democracia más alto en comparación, presentó el índice más elevado de criminalidad. Mientras tanto, Bolivia, que alcanzó el índice de criminalidad más bajo de la región, incluso por debajo del promedio regional y mundial, cuenta con el nivel más bajo de democracia (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023; Economist Intelligence, 2023).

De acuerdo con la Corporación Latinobarómetro (2024) en Perú y Bolivia, la democracia tiene un mayor grado de apoyo entre la población (50 % y 51 %, respectivamente), en comparación con el promedio de América Latina (48 %). Por su parte, Colombia presenta el mismo nivel que la media latinoamericana (48 %), mientras que Ecuador se ubica muy por debajo del promedio con apenas 37 %. En otras palabras, en dicho país, uno de cada tres ecuatorianos apoya la democracia y dos de cada diez respaldan al autoritarismo, siendo este último promedio el más alto en comparación con los otros países andinos.

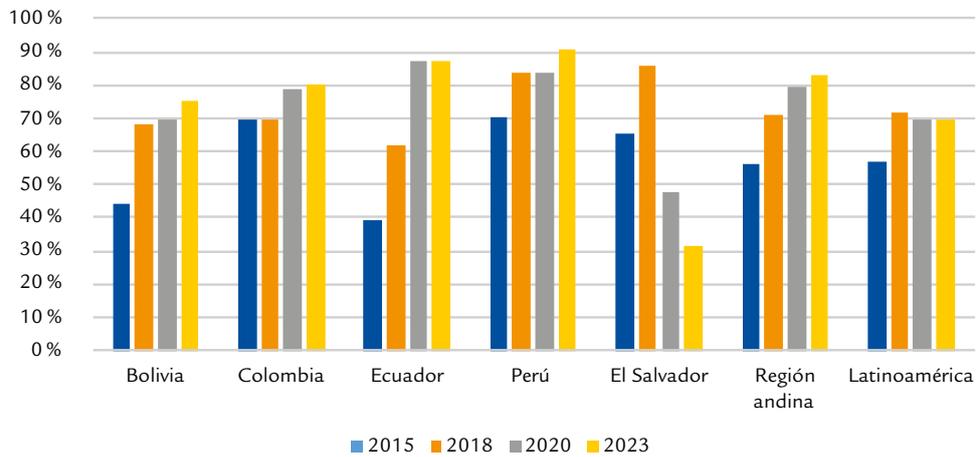
Respecto al grado de insatisfacción con la democracia (en otras palabras, la insatisfacción respecto a la capacidad de la democracia para resolver los problemas personales y colectivos), el promedio de la región andina es superior al latinoamericano: el 83,2 % de la población se encuentra “no muy satisfecho” y “nada satisfecho” con la democracia. Es relevante mencionar que, en todos los países andinos, esta insatisfacción ha crecido durante los últimos ocho años. Destaca el descontento en Perú y Ecuador, donde casi nueve de cada diez personas expresan descontento con el modelo democrático.

Contrasta el hecho de que El Salvador, un país con promedios de insatisfacción superiores a los países andinos, al menos durante 2015 y 2018, ha experimentado un crecimiento en su satisfacción en el último quinquenio. Así, en 2023, solo un tercio de la población salvadoreña se mostró insatisfecha. Seguramente, las políticas de mano dura en el manejo de la inseguridad, ejercidas en ese país por el presidente Bukele, han contribuido a esa mejora. De forma paradójica, El Salvador es considerado un régimen híbrido (de escaso avance) en el índice de la democracia, dado que en 2022 se ubicó en el puesto 93 por debajo de Ecuador, Perú y Colombia. Esto quiere decir que, si bien las políticas autoritarias, en función de su efectividad, pueden mejorar la credibilidad de un gobierno y un sistema, no necesariamente implican avances significativos en

los índices de democracia global, los cuales se basan, en esencia, en el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos humanos.

Gráfico 1

Insatisfacción con la democracia: no muy satisfecho-nada satisfecho



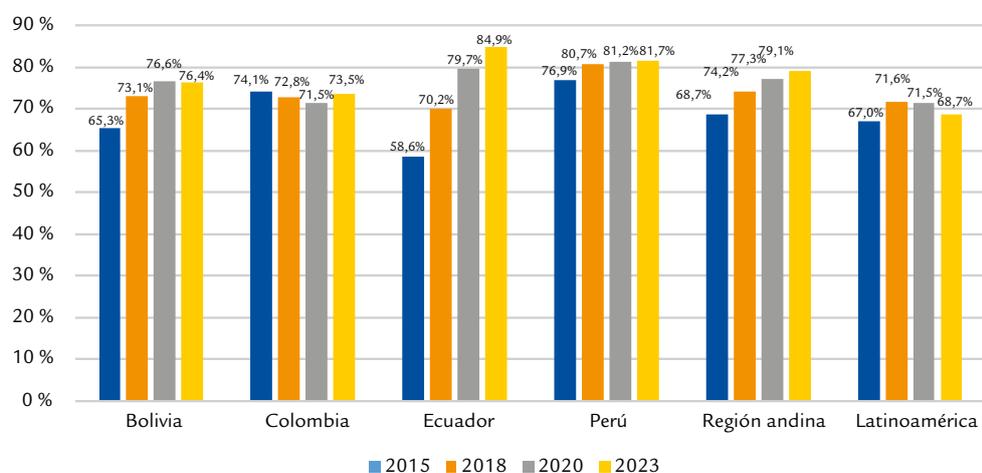
Fuente: Corporación Latinobarómetro (2024).

Este retroceso de la satisfacción con la democracia no puede ser atribuido únicamente a la inseguridad. El tema del empleo, la economía, la política y otros factores, sin duda, también tienen incidencia. No obstante, la inseguridad y la corrupción se posicionan en primera línea. Así, en América Latina, entre 2020 y 2023, el promedio de inconformidad con la lucha contra la corrupción es del 66 % de la población. En Perú y Ecuador, la insatisfacción es mayor; de hecho, más del 75 % de las personas creen que se ha avanzado poco o nada en ese tema. En Colombia, los niveles de inconformidad son un poco menores (70 % de la población) y en Bolivia, el promedio de malestar es ligeramente menor que la media regional (65 %).

Gran parte de este problema ha afectado la credibilidad de la justicia y de la policía. En general,

la región andina ha experimentado un crecimiento sostenido de la superior al latinoamericano en este período de tiempo. El caso más evidente de este deterioro es Ecuador, que ha pasado de tener un 58 % de la población que desconfía de la justicia en 2015 a contar con casi un 85 % en 2023. Es relevante mencionar que este promedio es el más alto de la región. En general, todos los países andinos superan el umbral del 70 % de desconfianza en la justicia. Algo similar ocurre con la confianza en la policía. En 2023, la desconfianza en la policía en la región andina bordea el 70 %, mientras que en América Latina es el 60,4 %. Bolivia es el país con mayor desconfianza en la policía, con un 80 %, seguido de Ecuador con un 72,7 %. Los militares, por su parte, se encuentran entre las instituciones de mayor credibilidad.

Gráfico 2  
Confianza en el sector justicia: poca o ninguna



Fuente: Corporación Latinobarómetro (2024).

#### 4. Respuesta a la inseguridad y democracia

Las respuestas a la inseguridad son importantes también para evaluar la democracia. En la región, a raíz del caso de Bukele en El Salvador, se han empezado a popularizar las políticas de mano dura como alternativa para enfrentar el crimen. No obstante, estas estrategias no son nuevas y han estado presentes de forma recurrente. Según World Prison Brief (2021), en todos los países andinos se ha incrementado la población penitenciaria en la última década. Sin embargo, los centros penitenciarios están lejos de ser espacios idóneos para la contención del crimen, en los que se respeten los derechos humanos. En efecto, la tasa de hacinamiento o sobrepoblación ha sobrepasado el 200 % en países como Perú y Bolivia durante la década pasada. El caso más visible de una crisis penitenciaria ha sido Ecuador. Desde 2019,

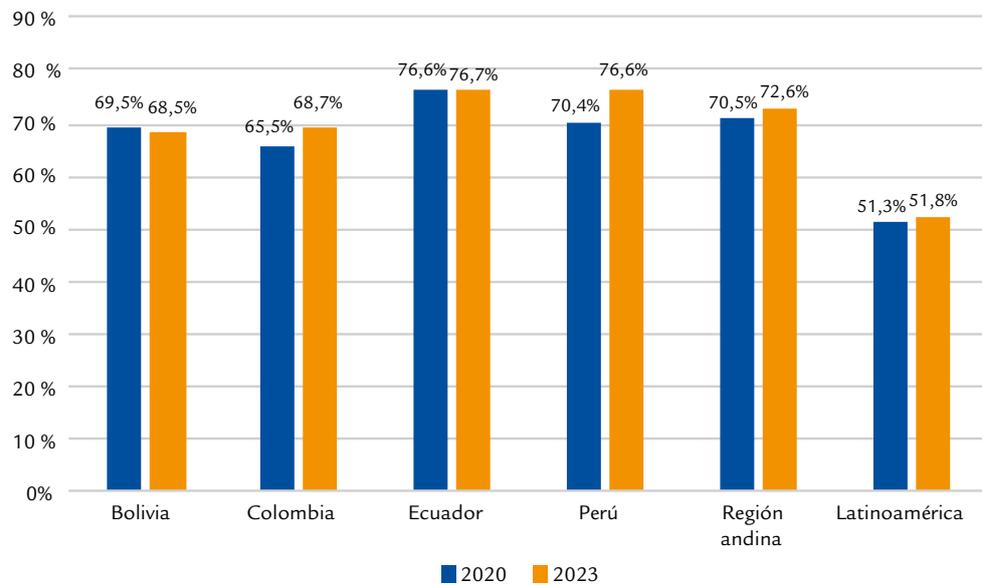
han ocurrido una serie de masacres (más de 600 muertes) ante la sorprendente incapacidad e inacción del Gobierno para contenerlas. Esta crisis, al parecer, se circunscribe en esta lógica de mano dura gubernamental, que promueve y ha naturalizado los “tratos crueles”, la “autorregulación” y el “merecimiento justo” como una pedagogía social para contener el crimen (Pontón y Álvarez, 2023).

Las respuestas gubernamentales de mano dura frente al crimen han encontrado asidero en el problema migratorio. Más del 70 % de la población andina dicen estar “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con que los migrantes causan el crimen. En América Latina, este porcentaje supera el 50 %; no obstante, en Perú y Ecuador es superior al 75 %. En otras palabras, siete de cada diez personas relacionan la inmigración con la inseguridad, lo que fomenta el autoritarismo y la intolerancia e

irrespeto hacia las diferencias. De manera particular, los niveles de estigmatización sobre la población venezolana han crecido a raíz del problema migratorio surgido en ese país desde hace ocho años.

Gráfico 3

Los inmigrantes causan el crimen: de acuerdo y muy de acuerdo

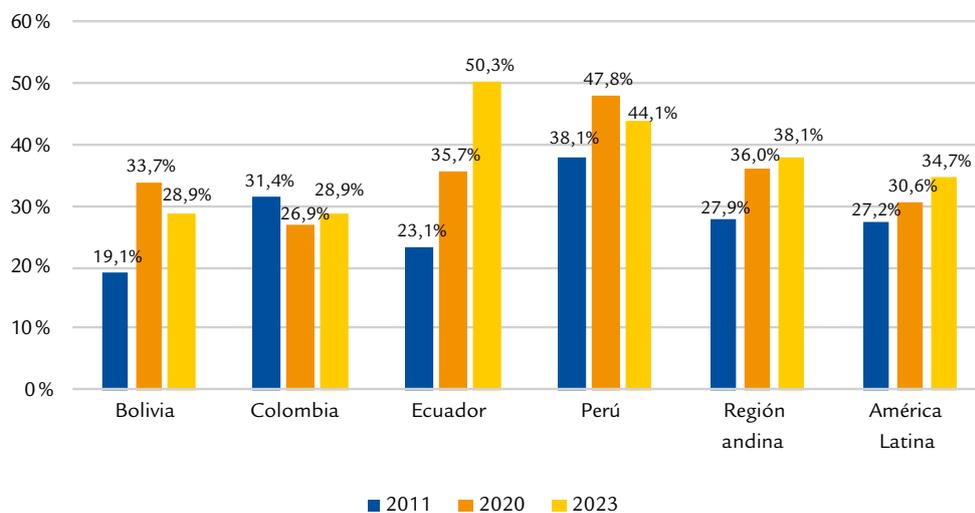


Fuente: Corporación Latinobarómetro (2024).

Por último, en los países andinos, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) son una institución que presenta mejores niveles de aceptación entre la ciudadanía que la Policía y el sistema de justicia. Según la Corporación Latinobarómetro (2024), la aceptación de las FF. AA. ha fluctuado entre el 45 % y el 55 % desde 2010, con niveles de “mucha confianza” o “algo de confianza”. En Ecuador, la confianza en las FF. AA. alcanzó el 52,5 %, el porcentaje más alto entre los países andinos. Esta confianza y reputación institucional ha dado paso para que en ciertos países de la región se considere que

con un gobierno militar de corte dictatorial es posible superar la crisis de inseguridad. En Ecuador, más del 50 % de la población apoyaría un régimen militar como medida de orden para resolver los problemas de las democracias. En Perú, este apoyo ha fluctuado por encima del 43 % entre 2020 y 2023. El promedio de la región andina es superior al latinoamericano, siendo Perú y Ecuador los países que más impactan en esta cifra. Los altos niveles de inseguridad, corrupción e inestabilidad que se viven en estos países podrían ser los factores que explican esta tendencia.

Gráfico 4  
Apoyaría a un gobierno militar



Fuente: Corporación Latinobarómetro (2024).

## 5. Conclusiones

La seguridad y la democracia son variables intrínsecamente ligadas. La creencia de que para garantizar la seguridad se debe renunciar de forma irrestricta a las libertades democráticas es poco demostrable empíricamente. El retroceso democrático atenta contra el equilibrio de poderes, limita la transparencia y reduce la efectividad, al tiempo que propicia la corrupción. En última instancia, la debilidad institucional facilita que el crimen organizado coopte el Estado.

La región se ha convertido en un epicentro del crimen organizado, debido a los despuntes históricos de la actividad del narcotráfico. Esto ha provocado un crecimiento importante en las prácticas criminales comunes, que a su vez generan importantes retrocesos

en el desarrollo y el bienestar de la población de los países afectados. En este sentido, se ha observado un deterioro peligroso en la satisfacción con la democracia en la región, en la que el crimen y la corrupción son variables cruciales a considerar, aunque no las únicas.

La desconfianza en la justicia y en la Policía es un tema relevante en el retroceso democrático. Está comprobado que la poca confianza en estas instituciones se asocia con un aumento en la justicia por mano propia. Si las entidades de justicia están diseñadas para el procesamiento de conflictos sociales, su deterioro en confianza puede ser considerado como un disparador de la violencia social. En este contexto, muchos conflictos sociales se resuelven mediante la violencia. En contraste, se posiciona la confianza

en los militares, en tanto que el discurso a favor de gobiernos militares resurge como un fantasma en la región.

A pesar de la atención que recibe la corrupción en la opinión pública, se observa poco avance en su erradicación. No avanzar en la lucha contra la corrupción atenta contra la calidad de la democracia, pues fomenta la cooptación criminal del Estado y la sociedad, al tiempo que atenta contra la contienda democrática clave para el equilibrio de poderes y la transparencia. Por otro lado, la migración, la desconfianza y las políticas de mano dura se posicionan como salidas poco promisorias para la consolidación de la democracia. Se puede concluir que el avance del crimen organizado y la inseguridad se da en un preocupante proceso de deterioro de las instituciones democráticas de la región, lo cual se presenta como un entorno poco favorable para avanzar en salidas efectivas a esta situación.

## 6. Referencias bibliográficas

- Banco Mundial (2020). Homicidios intencionales (por cada 100.000 habitantes) | Data. <https://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5>.
- Callejas, J. (2014). La teoría del Estado fallido: entre aproximaciones y disensos. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategias y Seguridad* 9(1), 87-110.
- Corporación Latinobarómetro (2024). Informe 2023: La recesión democrática en América Latina.
- Cortés, F. (2010). El contrato social liberal: John Locke. *Co-Herencia* 7(13), 99-132.
- Economist Intelligence (2023). Democracy Index 2022: Frontline Democracy and the Battle for Ukraine. [www.eiu.com](http://www.eiu.com)
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2023). The Organized Crime Index. <https://ocindex.net/>
- InSight Crime (2021). Balance de InSight Crime de los homicidios en 2021. *InSight Crime*. <https://es.insightcrime.org/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2021/>
- Morris, I. (2017). *Guerra ¿Para Qué Sirve?* Ático de los libros.
- Pontón, D., y Álvarez, C. (2023). Penalidad neoliberal y necropolítica: una aproximación a las masacres carcelarias en Ecuador. *Delito Y Sociedad*, (56), e0101. <https://doi.org/10.14409/dys.2023.56.e0101>
- Rotberg, R. (2003). *One Failure and Collapse of Nation-States*. <http://assets.press.princeton.edu/chapters/s7666.pdf>
- Santos, G. (2009). *Estados fallidos: definiciones conceptuales*. México, D. F.
- World Prison Brief (2021). Highest to Lowest - Prison Population Rate. <https://n9.cl/jaym3>